Ángeles Barrio Alonso, *Por la razón y el derecho.
Historia de la negociación colectiva en España
(1850-2012)*

José Antonio Pérez Pérez

Edición electrónica

URL: <http://journals.openedition.org/bhce/797>

DOI: 10.4000/bhce.797

ISSN: 1968-3723

Editor

Presses Universitaires de Provence

Edición impresa

Fecha de publicación: 1 junio 2017

Paginación: 321-322

ISSN: 0987-4135

Referencia electrónica

José Antonio Pérez Pérez, « Ángeles Barrio Alonso, *Por la razón y el derecho. Historia de la negociación colectiva en España (1850-2012)* », *Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne* [En línea], 51 | 2017, Publicado el 09 octubre 2018, consultado el 24 septiembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/bhce/797> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/bhce.797>

El desarrollo de la institucionalización de la negociación colectiva en España corrió en paralelo al propio proceso de democratización del sistema político y, en gran medida, estuvo sujeto a los avatares que sufrió este último. El trabajo de Ángeles Barrio, una de las mejores especialistas en el estudio del mundo laboral contemporáneo de este país, plantea un interesante recorrido a lo largo de un siglo de negociación colectiva, desde sus tímidos inicios hasta culminar en la reforma laboral impuesta por el Gobierno del presidente Mariano Rajoy en 2012. Puede parecer en este sentido un libro un tanto atípico dentro del panorama historiográfico, pero sin duda es un libro necesario que está llamado a convertirse en un verdadero manual, en toda una referencia sobre el estudio de esta cuestión tan poco tratada en España. La autora lleva varias décadas proporcionándonos excelentes trabajos sobre la historia social y el mundo laboral, con aportaciones tan notables como sus investigaciones sobre la «democracia industrial», de la que es una verdadera especialista. En esta ocasión se ha centrado en un tema clave para comprender ese complejo mundo desde una perspectiva histórica que no desatiende en absoluto, sino todo lo contrario, las importantes implicaciones jurídicas y políticas de la misma.

Como se recuerda en su introducción, «la filosofía de la reforma social no puede entenderse sin la reformulación que sobre la responsabilidad del Estado ofrecían las teorías del nuevo «liberalismo» y sin ella no hubiera podido pasar de la teoría a la práctica, institucionalizando las normas de garantía del ejercicio de los nuevos derechos, los derechos sociales, que eran, no individuales como los del liberalismo clásico, sino colectivos». Fue precisamente bajo esta premisa como comenzó a dar sus primeros pasos el proceso de institucionalización normativa sobre esta materia. No fue una tarea fácil. El trabajo de la profesora Barrio pone de relieve los problemas que surgieron desde finales del siglo XIX y subraya un aspecto relevante: la importancia que tuvieron, no solo la filosofía y teoría económica del liberalismo y la propia intervención del Estado en la cuestión social, sino las prácticas políticas y la actuación legislativa que se derivaron de ella. Sin estas instancias en las que se revela la relación entre el Estado y las asociaciones, entre el individuo y la colectividad en términos de derechos y deberes, sería imposible desentrañar, por ejemplo, las claves de las luchas sindicales a favor de los derechos sociales como derechos colectivos.

El libro se articula en seis capítulos. El primero de ellos está dedicado a la definición del marco histórico de la negociación colectiva y resulta especialmente interesante para sentar las bases conceptuales y teóricas del objeto de estudio. A lo largo de los otros cinco capítulos se traza un recorrido que va poniendo el acento en las condiciones, características y evolución del marco normativo de relaciones laborales, pero también proporciona un interesante análisis de los diferentes actores que intervinieron en el proceso de institucionalización de la negociación colectiva, con una atención especial al importante papel que ha jugado el Estado a lo largo de este ciclo. Esta larga y problemática historia arrancó con la puesta en marcha de la Comisión de Reformas Sociales (1883), continuó con el importante impulso que dio el Instituto que heredó el mismo nombre (1903) y siguió dos décadas más tarde con la creación de un Ministerio propio (1924), tras haber desarrollado una abundante legislación social protectora. Sin embargo, la falta de eficacia de los instrumentos del Estado en esta materia no consiguió atraer ni convencer a las otras dos partes implicadas en esta relación triangular, es decir, los trabajadores y los empresarios,

que durante años se aplicaron con fruición en una lucha sin cuartel, al menos hasta el final de la Restauración.

Durante la dictadura corporativista de Primo de Rivera, el nuevo régimen trató de ofrecer un marco normativo para el desarrollo de las relaciones laborales, y lo hizo a partir del Código del Trabajo de 1926. A pesar de ello, su institucionalización no se produjo plenamente hasta la Segunda República, gracias al impulso y determinación de Largo Caballero y a través de una trama normativa que conectó con las tendencias reformistas europeas. La Ley de Contrato de Trabajo de 1931 y la Ley de Asociaciones Profesionales de 1932 constituyeron dos importantes avances en esta materia. El fallido golpe de Estado y la posterior guerra civil frustraron el camino emprendido unos pocos años antes y abrieron paso a una larguísima dictadura que heredó en cierto modo la orientación corporativa e intervencionista de épocas anteriores, adaptándola a un sistema aún más rígido y estricto, como el impuesto por el sindicalismo vertical. Solo a partir de 1958, con la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos, comenzarían a producirse algunos cambios que permitieron, aunque con importantes limitaciones, una progresiva negociación de las condiciones laborales entre las partes.

Aquel enorme edificio verticalista fue el primero en resentirse de los cambios que se estaban produciendo dentro de la sociedad española. La Organización Sindical Española y su arquitectura política e institucional fueron desmoronándose a medida que se encaraba el final de la dictadura, como consecuencia de la presión de las nuevas organizaciones sindicales de clase y muy especialmente de las Comisiones Obreras. A pesar de ello, o quizás como consecuencia de este mismo proceso, el régimen de Franco dejó en herencia una importante función tutelar e interventora del Estado que los impulsores del nuevo sistema democrático adaptaron al nuevo marco democrático. La crítica situación económica y laboral que se dibujó en España a finales de la década de los años setenta del siglo XX obligó a los actores sociales, incluidos los dos grandes sindicatos, a instaurar una posibilista política de concertación social de inspiración neocorporativa, que se consolidó a través de los numerosos acuerdos alcanzados durante la primera mitad de la década siguiente. Todo ello posibilitó una relativa paz social que solo se vio interrumpida de forma abrupta a raíz de la huelga general de 1988, un conflicto de singular trascendencia que ha marcado un hito dentro del movimiento obrero en España. A pesar de este episodio e incluso de otros posteriores, como las diferentes reformas del mercado laboral impulsadas en 1994 y 1997, o de las duras medidas impuestas en 2010 por el presidente Rodríguez Zapatero, el diálogo social entre las partes se mantuvo dentro de unos determinados canales de entendimiento.

Sin embargo, este largo periodo se vio interrumpido recientemente y de forma brusca por la reforma laboral de 2012, que ha devuelto a los trabajadores y al marco legal de relaciones laborales prácticamente a la situación de finales del siglo XIX; un episodio que forma parte del último capítulo de este libro y que sirve de colofón para dejar en el aire un interrogante sobre el futuro de la concertación social en este país. Todo esto y mucho más analiza este espléndido trabajo, riguroso y documentado, que aborda una de las cuestiones fundamentales, la de la negociación colectiva, para comprender también el largo y tortuoso proceso de democratización del sistema político en España.

José Antonio PÉREZ PÉREZ

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea